

La paz y la guerra en la estrategia revolucionaria. Tres casos contemporáneos

*Juan Houghton**

Este es un análisis de la concepción de la paz y la guerra, en tres proyectos revolucionarios cercanos a nosotros: dos colombianos y el mexicano de Chiapas; no se hace una lectura de las condiciones que propician la guerra, ni de los aparatos armados o semiarmados de la burguesía.

A diferencia de la Edad Media, en estos tiempos la guerra tiene mala fama; por lo menos quienes más escriben sobre guerra son quienes están contra ella. Eso le da un sesgo a los estudios, explicable, pero que tal vez no ayuda a mirar en profundidad el fenómeno. Trataremos de eludir esa postura, y enfocarla desde otro ángulo: cómo aporta la guerra en la estrategia revolucionaria.

Para que el movimiento revolucionario y popular se coloque en condiciones de derrotar al capitalismo, requiere: a) agrietar la hegemonía burguesa y ganar para que el pensamiento revolucionario esté en mejores posiciones para dar el combate al pensamiento del capital; b) insurgir en el conjunto del movimiento popular; trabajar para que los trabajadores, los marginados y oprimidos compartan cada vez más lo que por comodidad llamaremos una cultura radical, donde el pensamiento revolucionario sea central; c) contar con un tejido social/un movimiento social altamente organizado y cohesionado, con autonomía, conciencia de sus intereses específicos y también de los intereses generales, y d) fundamentalmente, debe contar

* Investigador, Fundación para el Trabajo y la Vida.

con una fuerza revolucionaria, una organización política que transforme las diversas y dispersas luchas sociales que se presentan en la actualidad, en una lucha orientada programáticamente y con un horizonte estratégico anticapitalista.

Esto presume que el movimiento revolucionario es un sujeto constituido en la historia de la lucha de clases, pero sobre todo que es un sujeto constituyente, que otorga sentido a la movilización propia y pretende otorgarlo a la movilización general.

Pero, estar en condiciones de derrotar al capital no implica la caída inexorable del mismo. Hay que tumbarlo. De ahí que “Una organización política de la clase obrera, de los explotados y marginados, que cumpla este papel, debe por tanto (además de): 1) Disputarle a la burguesía la hegemonía ética, ideológica y cultural de la sociedad, considerando la forma transnacionalizada, mediática y de masas en que hoy se ha desarrollado esa hegemonía; 2) Disputar la hegemonía política y construir formas de poder alternativas”¹.

La diferencia entre construir las condiciones revolucionarias y pasar a la ofensiva por la hegemonía política y el poder, es el nudo de las estrategias militar-revolucionarias. ¿En qué momento se define el paso a una disputa por el poder y cómo se preparan las condiciones político-militares? Esta pregunta debe resolverse teniendo en cuenta que la guerra civil no es similar a la lucha de clases, sino que es un momento dentro de un largo proceso de acumulación política, en el cual las organizaciones revolucionarias despliegan diferentes actuaciones y recursos para ganar la voluntad y el reconocimiento popular, prerequisites para dar un salto a la disputa abierta del poder, vale decir, de la hegemonía política.

La guerra civil constituye una etapa determinada de la lucha de clases cuando ésta, al romper los límites de la legalidad, llega a situarse en el plano de un enfrentamiento público y, en cierta medida, físico, de las fuerzas en oposición. Concebida de esta manera, la guerra civil abarca las insurrecciones espontáneas determinadas por causas locales, las intervenciones sanguinarias de las hordas contrarrevolucionarias, la huelga general revolucionaria, la intervención por la toma del poder y el período de liquidación de las tentativas de levantamiento revolucionario².

1. *Presentes por el Socialismo*, 1998, a.

2. Trotsky, 1983, p. 110.

Pero este proceso de colocar al conjunto del movimiento popular en condiciones de derrotar al capitalismo no es, de ninguna manera, una tarea escolástica, lineal y tranquila. Es en el curso de las luchas reivindicativas parciales, sectoriales y locales, expresadas en lo político por las movilizaciones callejeras o electorales, que se van construyendo estas condiciones; y no en todas las regiones del mundo estas luchas reivindicativas cuentan con el espacio democrático para desenvolverse, sino que se caracterizan por darse en marcos de ilegalidad, de guerra sucia y de terrorismo de Estado. Porque, en estas condiciones de “contrarrevolución preventiva”, es donde surge la particularidad de la mayor parte de las luchas revolucionarias armadas que se presentan en el mundo contemporáneo.

Un breve relato

La lucha armada en Colombia, desarrollada por el ELN y las Farc, tiene como objetivos estratégicos la *toma* del poder, con todo lo problemático que resulte el término. Uno y otra se afirman sujetos. Es verdad que hay condiciones objetivas que la impulsan, la propician y la justifican, pero la guerra es una decisión y no una fatalidad; por eso hay una estrategia.

La lucha armada se ha desarrollado y alimentado en Colombia teniendo como funciones principales: 1) La defensa de los procesos sociales de organización económica, política y social, y la consiguiente destrucción de las fuerzas privadas de terratenientes y empresarios, principalmente en el campo. De hecho, en Colombia –dado el carácter criminal y retrógrado de las clases dominantes– ha servido, incluso, para resolver reformas democráticas que en otros países fueron impulsadas por la propia burguesía en su época de ascenso político, o para defender aun los derechos mismos que la democracia liberal ha consagrado en sus constituciones. 2) La defensa de la autonomía social y de la agresión criminal de las fuerzas de control ciudadano, principalmente en las ciudades; el auge de las formas de organización miliciana propiciadas por la insurgencia, han concentrado su lucha en la neutralización de las operaciones de limpieza social realizadas por comandos de la policía y grupos privados, organizados especialmente por comerciantes, en desarrollar acciones de control social y represión de los grupos de delincuencia común (bandas, pandillas) y, en menor medida, para evitar los operativos paramilitares contrainsurgentes. 3) La destrucción de fuerzas combinadas del Ejército, dirigida a neutralizar su eficacia en la represión y control social, a mermar su moral interna, y a la consolidación creciente de niveles de control territorial –entendido éste como control de poblaciones, de recursos

y de áreas militarmente estratégicas–, acciones insertas en una concepción de guerra prolongada que incluye acciones milicianas y guerrilleras.

El protagonismo y liderazgo político lo adoptaron las fuerzas insurgentes revolucionarias, que articularon –salvo el caso del M-19– y generaron tanto las formas de autodefensa, como un número importante de las milicias urbanas. Las acciones que se desprenden de estos tipos de concepción, subordinadas a la de guerra prolongada, se dirigen principalmente a enviar mensajes militares al enemigo, sea mediante la destrucción física de sus fuerzas, como neutralizando sus acciones. No obstante, los actores reconocen que sólo en una lucha de todo el pueblo, puede pretenderse vencer las fuerzas armadas y semi-armadas del capital. ¿Cómo se pretende resolver esto? Un proceso de acumulación que transforme la guerra de guerrillas/autodefensas en una guerra de ejércitos que se disputan el control territorial sobre áreas estratégicas económica y militarmente, y sobre las poblaciones.

El proceso de crear las condiciones para una guerra de la mayoría de la población –lo que se conquista con una población politizada, es decir, organizada y con alguna conciencia de sus objetivos anticapitalistas, o en una movilización anticapitalista explosiva, o una combinación de ambas– se concibe mediante un proceso de politización y organización posterior al control territorial, y por el efecto que las acciones político-militares van teniendo en los niveles de conciencia política. *La particularidad del caso colombiano es la existencia de una guerra insurgente sin guerra civil.* Tanto las Farc como el ELN son conscientes de esta fractura.

El rasgo diferencial se presenta a principios de los 80 con la incorporación en la UC-ELN de la concepción de “poder popular”. A las tareas de destrucción y neutralización de las fuerzas enemigas, se incorpora de manera más clara la de construir órganos de poder popular, en un contexto en el cual no hay sin embargo territorios liberados. Se trata de un poder popular clandestino, que no opera como interlocutor del gobierno burgués y que ante la presencia militar enemiga permanece marginal; su función se desarrolla en condiciones de presencia insurgente. No es casual, por lo mismo, que la construcción de poder hasta el presente haya sido definida con inexactitud: concebir el órgano de poder popular como célula del movimiento.

Las Farc, en desarrollo de su evidente crecimiento y de la ampliación de las zonas de influencia, han pasado a una fase de propiciamiento de formas de gobierno local diferentes a las estatales. Aunque no han expresado una teorización de “poder popular”, su insistencia en la realización de asambleas municipales-locales donde se eligen administraciones, tiene un

rasgo importante en esta dirección. No obstante, estas alcaldías —elegidas de forma extralegal—, se articulan al aparato estatal, principalmente por razones presupuestales y militares. Hay que ver, no obstante, que no se trata de municipios/alcaldías autónomos de la presencia insurgente; en zonas de más clara presencia de las Farc, el gobierno son ellas mismas, y no otra forma de poder comunitario; es claro, por supuesto, que en la mayor parte de los casos se trata de experiencias de gobiernos anti-bipartidistas antes que anticapitalistas.

En México, la insurrección zapatista tiene otros componentes. Salvo concebir la lucha armada como forma de defender los procesos sociales de organización económica, política y social, y el enfrentamiento de las guardias blancas de los ladinos ricos, terratenientes y algunos comerciantes, principalmente en el campo, la guerra se ha concebido en función de darle “voz y dignidad” a los marginados, pero no en sentido simbólico de “grito”, sino de conquistar condiciones materiales para “poder decir”. Por el hecho de que “La naturaleza y el sentido del zapatismo provienen de un actor social y cultural (étnico) que se lanza a un levantamiento armado proyectándose a la escena política”, la guerra es asumida por las comunidades como un mecanismo para el “reconocimiento”.

La irrupción zapatista que tiene como génesis la marginalidad, el desconocimiento y el abuso (recordar las reformas al artículo 27 de la Constitución, sobre la propiedad comunal de los ejidos) logra, en ese contexto, darle también sentido a la enorme movilización barrial que se presentaba, pero al mismo tiempo le da sentido nacional a la rebelión. Y sentido universal por el momento en que acontece: como lo reconoce Marcos, el contexto mundial para salir a una guerra es totalmente desalentador: desaparición del bloque soviético, pérdida electoral en Nicaragua, negociación en bajada en El Salvador; y es justamente por este sentimiento de derrota que la “dignidad” de la postura zapatista le otorga sentido a la reacción popular que se viene dando en México y el mundo. “El actor zapatista es étnico, nacional y universal. Se quiere mexicano pero sin dejar de ser indígena; quiere un México donde pueda ser reconocido y escuchado. Es universal, no *a pesar* de su propia identidad indígena, sino *a causa* de ella”³. La necesidad de trabajar con/desde el “Otro” (el otro soy yo) se consolida en un lenguaje y una actitud, que luego se potencia en la interlocución con la sociedad mexicana y la humanidad.

3. Le Bot, 1997, pp. 20 y ss.

En el aspecto político-militar, el EZLN consolida su fuerza en un campo particular: la fuerza simbólica; simbolismo de lo armado y no armas simbólicas, pues como señala Marcos, los zapatistas están dispuestos a morir... y a matar. La insurrección social y moral del zapatismo plantea una forma de interlocución radicalmente distinta a la que se aprecia en el caso colombiano. La particularidad de la guerra del EZLN es su decidida distinción del sujeto político de las transformaciones revolucionarias. Quizás en esto radique la ineficiencia militar que se le endilga; pero, más exacto es decir que la guerra ha sido concebida y desarrollada para algo diferente que lo que se le pide. *La guerra se define en dos direcciones: que sea guerra de la comunidad; que se transforme en guerra civil.* El objetivo de la lucha armada está centrado en la afirmación del sujeto político zapatista y la construcción del sujeto político mexicano, antes que en el desarrollo militar.

La primera de estas concepciones se expresa en la conformación de los municipios zapatistas. Esta posibilidad estaba dada desde antes de la aparición mass-mediática de los zapatistas. De hecho, se “transitó de la movilización de un actor social, por parte de una vanguardia político-militar, a la práctica del secreto y la clandestinidad compartidos por la comunidad”. Una comunidad que guarda el secreto durante un lustro sobre la presencia armada, que toma la decisión de cuándo y dónde atacar, que define si hay paz o no con el gobierno federal mexicano, no tiene dificultades para transformarse en municipio autónomo que toma decisiones económicas, políticas, sociales y culturales, y a los cuales el gobierno federal debe reconocer para la realización de obras.

La segunda concepción se hace evidente en el llamado permanente, real, a la conformación de un escenario de todos los sectores populares. La Convención Nacional Democrática, la formación del Frente Zapatista y el llamado a la Internacional contra el neoliberalismo, en la cual el EZLN no es más que uno más en términos de sujetos miembros, y un garante armado en términos militares, indican una manera especial de concebir quién es el sujeto del proceso revolucionario.

La referencia a Zapata no es casual ni propagandística, sino en términos de concepción del sujeto revolucionario. Hace referencia a un siempre recordado suceso. Tras la victoria de Zapata y Villa, el arribo a la capital se espera con inquietud. Los dos jefes militares se hacen tomar una placa de daguerrotipo en la oficina presidencial y luego regresan al campo, a trabajar. Más que un abandono de su función (no hay que olvidar que ambos protagonizaron levantamientos posteriores contra el “mal gobierno”), lo que hacen es entregar al pueblo (en ese momento un naciente proletariado, un gran campesinado y una capa burocrática radical) el poder.

Esta concepción de lucha armada desalienta a quien la concibe en un plano de disputa de la hegemonía política, pero mirado desde el plano de la hegemonía cultural y ética el resultado es notable, como veremos en seguida.

La lucha armada en la preparación de las condiciones revolucionarias

a) En la tarea de agrietar la hegemonía burguesa y ganar en el proceso de que el pensamiento revolucionario esté en mejores posiciones para dar combate al capital, vale decir, en la tarea y la función de producir análisis políticos, económicos, culturales y posicionarse/los dentro de las elites intelectuales y políticas, se destacan las diferencias de los tres proyectos que analizamos.

El discurso ético, el análisis más difuminado del sujeto histórico y la concepción del poder popular del ELN, logró en ciertos momentos extenderse a amplias capas de la intelectualidad colombiana, que encontraron más fácilmente un lugar para desarrollar sus análisis, incorporando así mismo elementos del ideario camilista-guevarista. Este campo ganado en una concepción amplia del pensamiento revolucionario permite (permitió) la coexistencia de sectores marxistas, procedentes de la teología de la liberación, y del radicalismo liberal, que se han sentido insertos en el proyecto, lo que dio posibilidades de mantener un margen de autonomía intelectual, al tiempo que se mantienen lazos de pertenencia. No obstante esta amplitud, se encontró con prácticas no inclusivas de la dirección política; el cambio en la línea de masas y el llamado a replegarse tras la crisis con la Corriente de Renovación Socialista, se tradujo no tanto en un distanciamiento de la intelectualidad del ELN sino de éste frente a estos sectores.

Las Farc, por su parte, más bien han recibido la influencia de escasos sectores intelectuales, antes que influir sobre ellos. De hecho la existencia del “intelectual colectivo” en la organización misma, resuelve en apariencia el problema de ganar presencia entre la intelectualidad colombiana como sector social; por otro lado, las diferentes alianzas desarrolladas con los liderazgos políticos y sociales tienen más un tinte orgánico regional, dirigido al control de las administraciones municipales, que ideológico nacional.

Otra perspectiva es la del EZLN. No tanto por haber sido definida de antemano, sino por la derrota sufrida ante la movilización notable de organizaciones sociales y ONG. Como señala Yvon Le Bot, “después del

formidable impacto del alzamiento, el nuevo zapatismo sufrió, a su vez, un fracaso. Éste no de orden militar, sino civil, impuesto por la sociedad civil y también por el poder—cosa que los zapatistas no reconocen con facilidad—mediante la decisión gubernamental de nombrar a un negociador y decretar un cese al fuego”. La iniciativa tomada por el gobierno, y la reacción—positiva pero contraria—de las organizaciones sociales y la intelectualidad, obligó a cambiar el sentido de la acción armada.

Las limitaciones de acción militar transforman el zapatismo de movimiento armado en fuerza política. “Las dimensiones de resistencia y revuelta armada siguen presentes, pero la violencia es contenida, controlada y encauzada hacia el objetivo de dar origen a una fuerza civil, cuyo proyecto pueda estar menos animado por la idea de invertir la pirámide del poder que por la de inventar una cultura y un sistema políticos al servicio de la sociedad, de la base”⁴.

b) Por otra parte, en desarrollo de una tarea de consolidar un tejido social/un movimiento social altamente organizado y cohesionado, con autonomía, conciencia de sus intereses específicos y también de los intereses generales, las acciones y propuestas de los tres proyectos se acercan y diferencian.

La postura y acción de las Farc al respecto en las zonas de influencia se pueden evidenciar en dos fenómenos de reciente ocurrencia. Tras (y antes de) la enorme movilización de los trabajadores cocaleros, donde tuvieron gran convocatoria las Farc, lo esperado es la consolidación de una organización social o gremial con formas análogas a las bolivianas, aunque con los ajustes pertinentes a la forma de la guerra colombiana. Sin embargo, todos los análisis realizados indican que no surgió este tipo de asociación, razón por la cual, entre otras cosas, fue derrotada rápidamente la movilización, liquidados sus voceros y rota la posibilidad de continuidad de la movilización, tanto para exigir el cumplimiento de los acuerdos como de ahondar en su formulación.

Esta fragilidad de desarrollo organizativo gremial y social se expresa en la postura política ante la presencia paramilitar en zonas cocaleras, donde se manifiesta el segundo fenómeno. El llamado de los distintos Frentes de las Farc a la comunidad es a organizarse al interior de la fuerza, disminuyendo la importancia a las autodefensas (las campesinas y populares, no la de los escuadrones de la muerte) que otrora fueran la forma utilizada.

4. Le Bot, 1997, p. 34.

Es claro que las Farc no defienden una tesis de renuncia al trabajo gremial; sin embargo, el hecho de que en las zonas donde tienen amplia presencia militar no se exprese un crecimiento similar de las organizaciones sociales, muestra algo más que el efecto de la arremetida de las fuerzas represivas.

No se trata de insuficiencia del trabajo político, pues es conocido el importante crecimiento de la Reunión Bolivariana como propuesta política orgánica al proyecto de control territorial que se viene desarrollando por las Farc. Por el contrario, es un efecto necesario de la concepción sobre el trabajo en el movimiento social, que produce lecturas insuficientes sobre los procesos urbanos, electorales y de luchas parciales, donde fenómenos como la reciente reducción del abstencionismo electoral en niveles considerables, la crisis ideológica de los dirigentes de las organizaciones sociales, es concebida como una prueba más de la necesidad y virtud de la estrategia militar- territorial y no, por ejemplo, de la urgencia de transformar las líneas de construcción de masas.

Esta última reflexión cabe también en la concepción del ELN sobre el trabajo organizativo. La amplitud ideológica del camilismo permitió una recepción importante entre dirigentes sociales, que no tuvieron la presión de una coherencia ideológica ni de una formación marxista, ni la obligatoriedad de la militancia, como sí ocurre con los partidos comunistas, sean ml, trotskistas o de la línea Kominform. El resultado es una adscripción política basada en lealtades éticas y de imaginario, más que en una concepción programática o ideológica, en la cual los dirigentes desarrollan los postulados emanados de la estructura militar pero no están obligados a la elaboración teórica.

Si la correa de transmisión y el vanguardismo (entendido como aislamiento de la vanguardia respecto de los procesos sociales) muchas veces fueron componentes de la práctica de las organizaciones leninistas, ellos se acentúan en las organizaciones político-militares donde la relación insurgencia-masas es de exterioridad. La crisis ocurrida con la CRS tuvo teóricamente este nudo, y la propuesta alternativa fue el basismo, ir a la organización social, trabajar con la lógica y objetivos de ella. Lo que se puso en evidencia es que ninguna de las dos concepciones facilitan la construcción de organización social para la revolución, porque ambas conducen a la despolitización de la sociedad: la primera, porque suplanta la tarea política de la clase; la segunda, porque renuncia a pensar en términos estratégicos. Pero la distancia de las dos posturas oculta una cercanía: la concepción exterior de la vanguardia armada o de la organización política frente a las organizaciones de la clase. Si se acepta que revolucionar la so-

ciudad, construir una cultura radical en el movimiento popular, son condiciones necesarias a la disputa por la hegemonía política, la ausencia de debate político en las organizaciones sociales es error central. Es necesario, dentro de una estrategia revolucionaria, que en la organización social se discuta política; si se hace basismo, no hay discusión porque no hay el interés; y si se hace vanguardismo, tampoco, porque nunca hay un encuentro del movimiento social con la organización política: con la correa de transmisión no se discute política, tan sólo se indica qué debe hacerse.

Los zapatistas pretenden romper con este problema, pero se encuentran con una barrera: el elevado nivel de institucionalización corporativa de la clase obrera mexicana. Esto los conduce a un atajo equívoco: interlocutar con sectores de la sociedad civil proclives al mensaje zapatista, para desde allí presionar la destrucción de la cooptación priísta del sindicalismo. Pero este distanciamiento de las organizaciones de masas, los pone frente a un número importante de ONG con altos niveles de incidencia comunitaria y social pero que no son formas de organización de esas comunidades, marcadamente compuestas por intelectuales, cuya debilidad orgánica los pone a la cola de los zapatistas, a vivir del prestigio del alzamiento. La Convención Democrática tuvo una respuesta amplia de intelectuales y ONG, pero el escaso peso social y el elevado protagonismo personal se tradujeron en una disputa por figurar, presionando una intervención autoritaria de los zapatistas para “llevar el orden”. EL EZ, a su pesar no ha podido “darle voz” a la sociedad civil, justamente porque su interlocución con la sociedad civil elude una caracterización precisa de intereses, niveles y peso organizativos, luchas de clases.

Sin embargo, esta limitación que se observa en la construcción de organizaciones sociales no puede mirarse de igual modo entre las comunidades chiapanecas. Tras la ruptura entre comunidades zapatistas y no zapatistas –que tuvo lugar antes de la irrupción pública del EZLN y que de hecho relativiza el éxito del trabajo de consolidación política–, la propuesta zapatista logra adoptar la línea de “mandar obedeciendo”. Lo cierto es que el mandar obedeciendo está asociado a la práctica del consenso indígena, que desde una mirada no indígena resulta antidemocrática, pues “excluye la disidencia, la abstención y el conflicto”. Los zapatistas han construido organización más allá de su fuerza militar; hay que decir, no obstante, que esta construcción de organización es diferente a la construcción de comunidad: la primera surge de una postura vietnamizante (la fuerza armada construye partido) y la segunda, de una crisis interna de las comunidades indígenas.

En lo que el EZLN sí es enfático es en atacar el distanciamiento entre organizaciones políticas y movimientos sociales, y en desarrollar una propuesta en la cual los líderes sociales/populares tienen un papel más protagónico y determinante en la acción política y en la propia constitución del movimiento. Los espacios social-populares de los municipios zapatistas son escenarios privilegiados del debate político y de la construcción de opciones, perspectivas de poder. La forma de hacer política de los zapatistas tiene un efecto indudable: transformar las organizaciones populares en su sentido y en su contenido, pues las coloca en un escenario de ruptura con la institucionalización corporativa y el gremialismo, que son taras del movimiento sindical mexicano desde los años 30. Lo cual no puede ocultar la ruptura e indiferencia (cuando no desprecio) por las comunidades no zapatistas y las fuerzas insurgentes que tienen una concepción diferente.

c) Queda claro en la historia y en la práctica de estas fuerzas insurgentes el aporte que hacen en la construcción de una fuerza revolucionaria, una organización política que transforme las diversas y dispersas luchas sociales, que supere la fragmentación de las luchas de clase.

El EZLN realizó una consulta internacional sobre la continuidad de su proyecto. El resultado fue la “orden” de la sociedad civil de transformarse en un movimiento político, a pesar de haber afirmado insistentemente en que un “partido más”, dedicado a las elecciones y las lides burocráticas era algo innecesario. Surgió entonces el Frente Zapatista de Liberación Nacional, un “partido más”. ¿Quiénes eran los otros, además del EZLN? Organismos no gubernamentales, mayoritariamente. De nuevo la fractura mexicana, la cooptación del sindicalismo, se interpone en la pretensión zapatista y es mínimo el número de organizaciones sociales que se suman. Pero, además, las fuerzas al interior del PRD –hacia el cual se dirigió gran parte del llamado– son remisas a contribuir a esta propuesta, que “sirve bien a crear hechos simbólicos” pero que importuna las aspiraciones burocráticas, y sólo un sector del PRT se desprende para sumarse a la propuesta; entre tanto, PRD y PRT acuden al EZ para recibir su aval moral previo a las elecciones, pero buscan otros escenarios para el ajuste de sus campañas políticas, que por cierto no lograron notables avances electorales en Chiapas. Esta respuesta era esperable: el sujeto social de las transformaciones no se sintió interlocutado, y el EZLN ha debido continuar cumpliendo una tarea de estimular los debates, de “propiciar la palabra” de los silenciados.

Resulta evidente el divorcio de la clase con la fuerza insurgente en lo orgánico, aunque se manifiesta insistentemente la cercanía en la producción de sentido. ¿Por qué? El discurso del Otro, en el que se construye la

universalidad de los zapatistas, diferencia y reconoce lo particular, y construye una idea de lo universal que se asemeja a la humanidad, y así se afirma. Pero, la propuesta implica una modificación de las prácticas políticas de las organizaciones sociales y políticas mexicanas, les corre el piso y conspira contra sus intereses. La ausencia de un discurso sobre los “propios intereses” resulta atractivo en la construcción de una ética, pero es precario en la movilización de cuerpos sociales generados justamente en torno de intereses (la mayor parte oportunistas en el caso sindical mexicano, es indudable, pero absolutamente pertinentes en la política).

Las Farc han lanzado una propuesta de organización política en la última época: la Reunión Bolivariana del Pueblo. Son notables las diferencias con la anterior propuesta conjunta con la UP, que concebía una alianza de fuerzas políticas y sociales con el liderazgo de la insurgencia. Lo cierto es que mientras las Farc participaron en ese proceso fueron líderes destacados; sin embargo, debe mirarse en detalle este liderazgo, pues expresaba una actitud positiva de la población ante los insurgentes, antes que una articulación orgánica del movimiento social con ese liderazgo, articulación que se desplegaba como tarea de las fuerzas políticas no armadas que confluían. Luego vendrían la represión criminal contra los militantes del movimiento, el obvio repliegue de las Farc, la salida o desaparición de las fuerzas políticas aliadas y los errores cometidos en la conducción del proceso, que implicaron una tendencia paulatina a la hegemonía del Partido Comunista y posteriormente a su fusión casi plena.

El genocidio contra la Unión Patrótica implicó un cambio en la concepción de las Farc frente a la construcción de organización política. En particular, hay una clara resistencia al trabajo abierto, una desconfianza en el liderazgo político no armado y, en consecuencia, una valoración crítica de las posibilidades de respuesta por parte de las organizaciones sociales a la agresión criminal de la burguesía colombiana. De ahí que el eje de la Reunión Bolivariana sea la aglutinación política de lo social, tras el proceso de consolidación de su poder territorial. Aunque se reconoce la presencia de otras fuerzas revolucionarias, es claro que el Movimiento Bolivariano ya no pasa por una unidad de la izquierda, sino por el crecimiento político militar de las Farc.

La viabilidad de esta propuesta puede ser vista desde la óptica del crecimiento de la influencia territorial de las Farc, de su enorme capacidad de destrucción de recursos militares del enemigo, y de su carácter de referente obligado para el actuar político; desde este punto de vista, sería razonable considerar que, a mediano plazo, las demás fuerzas políticas deberán sumarse a la estrategia envolvente que se desarrolla. No obstante, la caren-

cia en la construcción de organizaciones sociales y en la generación de pensamiento revolucionario y cultura radical le ponen límites al propio crecimiento de la propuesta.

Es posible que el propio crecimiento político del Movimiento Bolivariano obligue a un replanteamiento en este sentido y abra las puertas a sectores que se diferencien al interior de esa propuesta, y pretendan mantenerse diferenciados como tendencias. Un escenario menos optimista indica que el cierre a ser influenciados por otros sectores políticos revolucionarios, en medio de una coyuntura como la que se presenta en Colombia, se traducirá –en caso de una negociación– en actitudes apáticas de la izquierda; esta situación puede revertirse si hay una modificación de la concepción con que trabajan políticamente en el seno del movimiento social, en particular si se logra una articulación orgánica que no fue posible en el anterior proceso de la UP.

Paradójicamente, el ELN es más lento en lanzar una propuesta de movimiento político. Por un lado, expresa la necesidad de construir con otras organizaciones, llama a fuerzas políticas a los escenarios de negociación, interpela abiertamente a la sociedad civil. Sin embargo, es cauteloso en lanzarse a construir una organización política, y mantiene su línea de rodearse de amplios sectores que les reconocen coherencia pero no son militantes. En otras palabras, se combina una estrategia de Frente con una práctica interna cerrada.

Este comportamiento se hizo más evidente luego de la crisis de AL, en la cual la idea de apoyar la construcción de una organización política de masas se abandona, ante el proceso natural de autonomización del movimiento político. El límite de esta estrategia es, justamente, el proceso de empoderamiento de una organización política de masas, y la necesidad de subordinar la estrategia militar a las definiciones de la organización política, lo que por lo general se traduce en una práctica esquizofrénica: se avala y apoya el movimiento político, pero se actúa sin someterse a él y sin tener en cuenta sus ritmos de construcción.

La concepción de la tarea de insurgir en el conjunto del movimiento popular y construir organización política, muestran una idea sobre la forma de re-presentación de lo popular que tienen los sectores que venimos estudiando. La re-presentación política es el proceso de elaborar un imaginario sobre los intereses populares y las formas de expresión de los mismos, para ubicarse en un lugar frente a ellos, mediante mecanismos inclusivos de la pertenencia. La falsa tesis de que la insurgencia no representa a los sectores populares porque ellos no la han elegido está presa de la lectura liberal de

re-presentación por mecanismos electivos (el Estado, el sindicato, etc.), pero deja por fuera procesos más complejos, como la re-presentación, de los del Ejército, las estadísticas, las selecciones deportivas o los premios Nobel. El EZ concibe a las comunidades como auto-re-presentadas y niega la posibilidad de otros mecanismos distintos a la presencia directa, tales como la delegación; las Farc, en una tradición más claramente leninista, plantean la posibilidad (y la necesidad) de definir científicamente los intereses fundamentales y estratégicos de la clase y concentrarlos en su acción; el ELN combina una mirada dual, que requiere un componente que concentre los objetivos estratégicos y otro que recoja la diversidad y parcialidad de lo social. Un ejemplo donde se pone en evidencia este análisis es la forma como se plantean los procesos de negociación: mientras el EZLN no negocia, sino que lo hacen las comunidades zapatistas con la simple veeduría de los armados, el ELN reconoce la necesidad de elaborar una agenda de negociación con la “sociedad civil”, pero reclama el derecho y el carácter de negociador, y las Farc se asumen como el sujeto de la negociación y presumen ser colector de la participación de las organizaciones sociales y de la sociedad civil en su conjunto.

La concepción del sujeto político-práctico de la revolución (quién la hace, no cuál es el carácter de la revolución, si proletaria o no) queda en evidencia en el relato que hemos hecho para efectos de ilustración. Las Farc reafirman una concepción de vanguardia, que abre espacios territoriales y configura procesos de politización articulados a su propuesta militar, desde la cual van construyendo una fuerza política en el seno del movimiento de masas; el resultado es una concepción donde *el poder insurgente deviene poder de clase*. El ELN teóricamente se concibe como parte de un proceso más amplio, en el cual se van subordinando al poder popular que se construye, en un proceso de doble vía *donde no existe diferencia entre poder popular y poder insurgente*. El EZLN renuncia a concebirse como *el sujeto político* y transfiere esa función al conjunto del movimiento popular.

De esta manera, la forma como se abordan las tareas de preparación de las condiciones revolucionarias se diferencia, pues una concepción de vanguardia armada asume para sí la tarea de dirigir la creación de esas condiciones, una de vanguardia colectiva la plantea en términos de combinación de acciones propias y de otras, realizadas por organizaciones políticas diferentes, armadas o no, y una de no-vanguardia se subordina a procesos que se desenvuelven en otros escenarios sociales.

La lucha armada en la disputa de la hegemonía política y la construcción de formas alternativas de poder

La relación entre la concepción del poder y la construcción de condiciones revolucionarias, se articula en la disputa por la hegemonía política. Lo que hemos denominado la “disputa por la hegemonía política”, hace referencia a la capacidad y disposición de las organizaciones armadas para apuntalar el poder revolucionario y destruir o neutralizar el poder político y económico del capital. Ya hemos hecho una aproximación al primer punto, pues de hecho la construcción de cultura radical, organización social y organización política se consolida en formas y órganos del nuevo poder. Más compleja es la situación con la destrucción o neutralización del poder del capital. ¿En qué consiste ese poder, hoy, en México y Colombia?

Sin entrar a resolver la caracterización de la fase actual del capitalismo, que implica un debate necesario, hoy la hegemonía del capital financiero sobre el capital productivo es un elemento compartido por los analistas.

Esta preponderancia es la que ha acentuado el derrumbe del sector agrario en nuestro país y ha desencadenado el proceso de desindustrialización... En esta misma dirección, la necesidad de crear unas condiciones para lograr la recuperación de las tasas de ganancia, ha llevado al capitalismo a implementar medidas dirigidas a afectar directa y profundamente el salario real y los sistemas de contratación, extendiendo el subempleo y generalizando el desempleo.

Esta lógica de acumulación desde el capital financiero ha terminado impactando negativamente los presupuestos públicos que hoy se destinan al pago de la deuda interna y externa... Pero, el capital transnacional no sólo viene por los recursos del ahorro interno, a través del crédito público y la apropiación del presupuesto; también quiere imponer las condiciones para que no haya límites a su modelo. En esta perspectiva se ubica la negociación que se está dando, de espaldas a los pueblos, del *Acuerdo Multilateral de Inversiones AMI*, promovido por los capitales transnacionales, a través de la OCDE (Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, donde se reúnen los países más desarrollados) y la OMC (Organización Mundial del Comercio), para garantizar la permanencia de la apertura de las condiciones favorables al capital en cada país; allí se resume el proyecto de poner a los Estados, ya no en manos del capital monopolista local, sino del capital transnacional... Este proyecto es convergente con la imposición de reglamentaciones supranacionales

sobre el acceso sin límites a los recursos naturales (biodiversidad) y los energéticos, y con la desnacionalización de las leyes sobre derechos de autor, patentes y producción de conocimientos... El cuadro se complementa con la adecuación de toda la infraestructura de servicios públicos y del ordenamiento territorial en distintos niveles, para facilitar la movilidad del capital y para poner a toda la población a pagar su instalación.

De la misma manera, el capital financiero transnacional busca hacer rentable la pobreza y lo marginal, logrando incrementar perversamente los niveles de explotación. En ese sentido, podemos empezar a hablar de una extensión de la extracción de la plusvalía a todos los segmentos de la sociedad. Esto se traduce en que casi toda acción humana hoy, es articulada y mediada por el capital financiero, que *concentra* así todos los circuitos de apropiación de la riqueza... Esta situación ha necesitado continuar enmascarando, a través de distintos mecanismos con los cuales se manipula, las distintas formas de control social y la localización y manifestación de los conflictos sociales. Se ubican en este campo la convocatoria desenfrenada a la participación ciudadana, que casi siempre conduce a descargar al Estado de sus responsabilidades sociales, desde la óptica de la autogestión. Igualmente, se inscriben en esta tendencia las políticas encaminadas a la *pacificación*, a través de lo que conocemos como solución pacífica de conflictos, las invocaciones a la convivencia y a la civilidad, y la implementación de mecanismos de seguridad y justicia comunitaria, que tienen más un objetivo de autocontrol para conservar el orden establecido que de democratización de la sociedad⁵.

Ante este escenario concreto, ¿qué significa disputar la hegemonía política? La lucha armada del ELN y las Farc ha tenido como objetivo la toma del poder, el socialismo, no obstante su papel importante en la contención de la agresión militar a las luchas y en la consecución de reformas que en otros países ha realizado la propia burguesía; ya señalamos el carácter preparatorio y alimentador de las condiciones revolucionarias que tiene la guerra para el EZLN, en función de darle “sentido” universal a las movilizaciones sociales. No obstante, las tres propuestas se conciben en una disputa de la hegemonía política, pues si bien el EZ ha expresado recurrentemente que no aspira al poder, lo que para todos es evidente –sobre todo para el gobierno federal– es que “ponen la política, la cuestión del poder, la cuestión política nacional, en el centro de la discusión”, y conspiran abierta y univer-

5. *Presentes por el Socialismo*, 1998, b.

salmente contra el Estado mexicano; en efecto, la reivindicación de autonomía política y el reconocimiento de los gobiernos indígenas, plantea una disputa y un enfrentamiento a la subordinación al poder del Estado. Es verdad que los Acuerdos de San Andrés no van más allá de lo “conquistado” por el movimiento indígena colombiano y que buscan “integración” a la sociedad mexicana, pero hay una diferencia notoria: estas transformaciones sólo pueden darse en el contexto de un cambio de todo el sistema político mexicano; su integración es a una sociedad distinta, con un sistema político modificado.

El centro de la propuesta zapatista al respecto es el desmantelamiento del sistema de partido de Estado. Aunque una transformación en tal dirección no tiene un carácter estratégico, en el sentido de enfrentamiento definitivo con el capitalismo y apenas si tiene efecto sobre la democratización de México, es seguro que el logro del mismo liberará (no se sabe hacia dónde) las fuerzas sociales represadas y domesticadas por el PRI, y replanteará el problema del poder de una manera esa sí estratégica, pues “repartirá de nuevo las cartas” y pondrá en un nivel de precariedad no sólo el sistema de Partido-Estado sino el Estado burgués en su conjunto.

La dificultad estriba en la pérdida creciente de influencia y radicalidad del PRD (desde sus inicios receptor de la izquierda marxista y el radicalismo liberal) y la incapacidad (imposibilidad) del EZLN de convertirse en el articulador orgánico de los desprendimientos del PRI-Estado. De esta forma, aunque la estrategia del EZ tenga éxito, la recomposición del capital financiero perfectamente puede darse al interior de un PRD adormilado y medroso.

Ahora bien, es claro que el EZ no ataca desde hace varios años. Las comunidades zapatistas pueden mantener su autonomía, en tanto el Ejército mexicano no rompa los límites políticos impuestos por los partidos políticos (incluido el PRI), las organizaciones sociales y de forma destacada las ONG, que le han obligado a jugar a la solución negociada. Pero, el control territorial es insostenible en un tiempo estrictamente militar para el EZ, de manera que su ganancia en la hegemonía cultural no se corresponde con la hegemonía política. Por otra parte, aunque el discurso contra el ALCA, el neoliberalismo, el capital financiero, está presente en la formulación zapatista, sus acciones militares no logran enfrentarlo, bloquearlo o neutralizarlo por la debilidad militar misma, por la presencia de sus fuerzas en zonas lejanas de las áreas petrolíferas y energéticas, de las maquilas, y porque no consideran que el momento político militar consista en esta forma de disputa abierta por el poder.

Al respecto, las Farc y el ELN han centrado su accionar táctico en varios ejes: régimen político, por un lado, como exigencia de desmonte y transformación del aparato represivo, o como neutralización de sus operaciones, y por el otro, en acciones de presión a las *elites* políticas regionales; sabotaje a la explotación de recursos energéticos o reforma del régimen de recursos naturales estratégicos; reforma agraria práctica mediante el esquema de control territorial directo o como reivindicación en un eventual proceso de reformas negociadas.

En mayor o menor medida, el manejo táctico se centra en el control territorial y el ataque a las fuerzas militares y paramilitares (a estas últimas en menor medida por su propia forma de acción centrada en el crimen sobre la población civil), donde se articulan a la estrategia de la guerra que se desarrolla. “Las recientes acciones de la insurgencia han demostrado la posibilidad de pasar a ejercer control temporal en las zonas de colonización y de golpear a toda estructura del ejército que allí se instale”.

No es necesario detenerse en la ventaja estratégica que significa la geografía colombiana para la guerra insurgente, y en el hecho de que la historia de la insurgencia la fue trasladando de zonas de influencia social a algunas áreas estratégicas de la economía y del control militar. Aquí radica gran parte de la capacidad de presión, negociación y neutralización de la insurgencia y, como han señalado varios analistas, el fondo de la estrategia militar y paramilitar del Estado. El mapa de la presencia e influencia insurgente coincide en varios lugares con el de los recursos de biodiversidad y reserva biológica, energéticos y eléctricos, transporte terrestre, corredores militares claves; en alguna medida en fuentes de agua y zonas agroproductoras. Esta presencia permanente puede darse por la peculiaridad de la economía campesina y agraria en su conjunto, donde el Estado sólo aparece represivamente y la autonomía agraria (pequeña parcela, colonizaje, reservas) permite la producción de medios de vida; y en zonas de cultivos ilícitos, donde la defensa ante la avanzada militar-paramilitar estimula en las sociedades la necesidad de reproducirse socialmente. La insurgencia resulta en estos casos una herramienta para sobrevivir socialmente, independientemente de que no se tenga plena conciencia de los objetivos estratégicos o de la estrategia de la guerra.

Sin embargo,

En la ciudad no se puede actuar con la lógica del poder territorial. No se puede construir desde lo armado, como en el campo, porque las reivindicaciones urbanas no se satisfacen con la simple defensa ante la agresión, como es posible en el campo... El agotamiento del modelo miliciano radica en eso: la simple defensa ante el crimen ofi-

cial no se traduce en medios de vida, ni en lucha social, colectiva, organizada.

Por otra parte, la transformación del capital y de sus formas de explotación, que sobre todo tiene lugar en las ciudades y que ha cambiado sustancialmente el papel del campo y de los recursos físicos (hoy, por ejemplo, el petróleo más que un activo físico se ha convertido en un activo financiero; igual ocurre con la biodiversidad) redimensiona también el carácter de las acciones militares⁶.

En especial, debe anotarse que los dos campos privilegiados de la explotación capitalista contemporánea no logran ser afectados, por ahora, desde una estrategia militar exclusivamente territorial. El capital y los flujos financieros, que tienen como palanca el aparato tributario-fiscal, operan en un espacio desterritorializado, y las inversiones capitalistas en comunicaciones-telecomunicaciones se desenvuelven prescindiendo del territorio, de manera virtual. No es casual la disposición de la tecnocracia neoliberal a entregar territorios, control militar y administraciones locales a la insurgencia en una eventual negociación, siempre y cuando se acepte el acceso de los capitales transnacionales a los recursos energéticos, de biodiversidad, y la autonomía plena de la banca central.

“No se trata de negar en términos absolutos la importancia de lo territorial, ni su espacialidad asociada al capital, sino de indicar que en la actualidad el capital tiene un margen tal de flexibilidad que puede ‘jugar’ a entregar a partidos y movimientos que provienen del movimiento popular, el gobierno de regiones enteras, e incluso países, como en el caso de El Salvador y Sudáfrica, seguro como está del peso de su hegemonía financiera y política internacional”⁷.

Pero, la insurgencia colombiana no está en guerra para negociar, sino para ganarla, aunque la eventualidad de una negociación esté presente. Es una incompleta tesis la que sostiene que la insurgencia ha venido incrementando sus acciones armadas para “posicionarse” ante la negociación o como parte de un programa táctico. La definición en 1982 de las Farc de convertirse en Ejército del Pueblo y las definiciones estratégicas de sus conferencias, así como la propuesta del ELN, dejan en claro que se trata de acciones con pretensiones estratégicas: en otras palabras, la insurgencia colombiana está pensando en *tomarse* el poder por las armas —entre otras cosas la única forma de hacerlo—, y actúa en desarrollo de ese objetivo. “Resulta ingenuo

6. *Presentes por el Socialismo*, 1998, a.

7. *Ibíd.*, 1998, b.

considerar que la continuidad de los últimos ataques masivos de las Farc es fruto del triunfalismo ante lo ocurrido en Las Delicias hace un año”; por el contrario, se trata de acciones concordantes con la estrategia revolucionaria que desenvuelven.

Como reconocen las diferentes organizaciones insurgentes y los analistas, el control territorial y el ataque a las fuerzas militares y paramilitares se conectan con los objetivos estratégicos en dos ejes: desgaste enemigo y acumulación.

Las escasas acciones bélicas realizadas por el ELN tras las negociaciones de Tlaxcala, se corresponden con la fractura de la CGSB que dejó de operar como unidad militar. El camino autónomo definido por las Farc y la mayor presión que tiene sobre el ELN la situación urbana que hemos anotado, ha impulsado que este último haya decretado un “repliegue” militar y una ofensiva política que es conocida en Colombia. La consecuencia de esta definición es lógica: la ampliación del control territorial se detiene y retrocede, los gérmenes de poder popular (que ya hemos caracterizado) se articulan mayormente al aparato estatal, y la fuerza bélica en gran medida se queda en un estado de potencia política, mas no de poder efectivo, o se destina a acciones tácticas de neutralización de acciones militar/paramilitares.

Las Farc han venido combinando las acciones de recuperación territorial en zonas donde se habían asentado los grupos paramilitares/escuadrones de la muerte y el ataque masivo a bases enemigas. Algunos sostienen que el cambio operado significa un paso de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones, e incluso otros, más osados, hablan de una guerra de movimiento o maniobra. Las Farc –a pesar de que mantienen una estrategia de control territorial– prefieren seguir hablando de zonas de influencia, antes que de territorios controlados permanentemente desde los cuales se desarrollan maniobras militares. Pero, esta modestia no puede ocultar una realidad geoestratégica: la imposibilidad de las fuerzas del Estado para controlar o ingresar en amplias zonas del país, el crecimiento del poder de fuego con artillería semipesada, la incapacidad del Ejército para seguir protegiendo a los paramilitares, y la crisis generalizada de la estrategia militar de contención a la insurgencia.

¿Para qué negocian, entonces? Aunque se siente una fatiga de amplias capas de la sociedad ante la guerra, no parece ser (y no debería serlo) ésta la razón de una negociación; tampoco la del empate militar, porque toda situación de equilibrio puede transformarse, si cambian las condiciones políticas de la guerra. Sostenemos una tesis optimista con un matiz de pragmatismo político: el crecimiento militar devela con mayor fuerza las insuficiencias

políticas, y esto obliga a un replanteamiento de las acciones dirigidas hacia y desde el movimiento social en su conjunto. En una situación de gran influencia militar como la que se tiene, la ausencia de resonancia en el movimiento social obliga a pensar en la necesidad del partido de la revolución, de organizar la protesta urbana, y los demás componentes de la estrategia de guerra popular. Esto es lo que empuja a las Farc a construir la Reunión Bolivariana del Pueblo, pero también a posicionarse en el seno del movimiento social y a consolidar sus zonas de influencia como zonas de control territorial permanente; ya hemos visto que la forma de pasar a construir el movimiento político adoptada por las Farc tiene límites evidentes, pero no se puede sostener que sea inconsistente. Por otra parte, la estrategia paramilitar del Estado rompe el tejido social, aunque no ataque el aparato militar insurgente, y justamente por ello afecta la política de las Farc.

Con lo que se muestra que la existencia de un ejército revolucionario no resuelve el problema del salto a una situación revolucionaria. Más aún cuando se reconoce que una parte importante de la base social de la insurgencia se mueve desde una óptica por la inclusión al sistema, antirrepresiva pero no anticapitalista ni socialista. Por otra parte, porque la definición del camino para dar este salto no depende de un análisis militar sino político.

El mando militar se las entiende con unidades combatientes organizadas, cuyo enlace entre sí ha sido cuidadosamente estudiado y combinado de antemano, gracias a lo cual el mando tiene, por así decirlo, sus ejércitos en la mano. Es evidente que no podría ser lo mismo en la revolución. Las formaciones de combate no están separadas de las masas, ni siquiera pueden acrecentar la violencia del choque, excepto en unión con el movimiento ofensivo de las masas. Desde ese momento incumbe al mando revolucionario asegurar el ritmo del movimiento, para fijar infaliblemente el momento en que debe tener lugar la ofensiva decisiva⁸.

“De esta forma, se configura una situación compleja: la insurgencia juega en el plano estratégico con insuficiencia de medios para definir el problema del poder, pero no interviene en el plano táctico coyuntural de la acumulación capitalista, porque está ubicada en un escenario donde su posibilidad de obstaculizar resulta parcialmente marginal”⁹. Pero, éste es el mismo problema de todas las organizaciones políticas revolucionarias, pues nuestra actuación táctica está marcada por el gremialismo, por no tener

8. Trotsky, 1987, 116.

9. *Presentes por el Socialismo*, 1998, b.

capacidad para abordar las peleas claves que hoy se nos presentan como imperativos.

Esto nos pone ante un reto: replantear el contenido del conflicto social y político del país. Tanto desde una estrategia revolucionaria, como desde una estrategia militar, requerimos intervenir para llenar la movilización política (sea la paz, la guerra o la lucha social) de contenidos de clase actualizados a la forma del capital, tanto a nivel táctico como estratégico. Ésta no es la tarea de una ponencia, sino de todo el movimiento revolucionario; pero algunas preguntas pueden ayudar:

- ¿Cómo bloquear, enfrentar y derrotar el capital financiero de forma revolucionaria y no sólo planteándole controles nacionales?
- ¿Cómo desarrollar una acción masiva contra el capital invertido en las telecomunicaciones/comunicaciones que hoy controla una parte considerable del PIB?
- ¿Cómo diseñar y ejecutar acciones de control masivo (incluida la insurgencia) sobre recursos estratégicos como la biodiversidad, el agua y el ambiente?
- ¿Cómo actuar políticamente en forma internacional (no sólo internacionalista) sobre instancias como el AMI, la OMC?

Como puede verse, esto constituye el reto y el nudo de la izquierda en Colombia, y no sólo de la insurgencia. Los límites de la insurgencia son los límites del movimiento revolucionario, independientemente de si se está armado o no. Si son más notables es por el peso específico que tiene la insurgencia en los contingentes revolucionarios.

Bibliografía

Le Bot, Yvon, *Subcomandante Marcos. El sueño zapatista*. Ed. Plaza & Janés, Barcelona, 1997.

Presentes por el Socialismo. Sobre la guerra y la paz. Aportes para definir una posición del movimiento popular y revolucionario, Bogotá, agosto de 1998.

Presentes por el Socialismo. Nuestras tareas para esta etapa de las luchas populares, No. 2, Bogotá, mayo de 1998.

Trotsky, L. "Doctrina militar y marxismo", en *Teoría y práctica de la Revolución permanente*, E. Mandel (ed.), Siglo XXI Editores, México, 1983.